

MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN PARA TODA LA CIUDADANÍA

La educación es, al mismo tiempo, un derecho constitucional básico que los poderes públicos deben garantizar y el primer factor de progreso individual y social. Además, las transformaciones sociales, económicas y culturales experimentadas por nuestra sociedad en los últimos años plantean nuevos retos y mayores exigencias a las que es necesario dar respuesta. Estos cambios requieren, entre otras cosas, que las administraciones garanticen a toda la ciudadanía los medios para hacer realidad la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida, requieren que se adopten las medidas necesarias para que todas las personas que vivimos y trabajamos en la Comunidad Valenciana, personas procedentes de diferentes países, de diferentes etnias, de diferentes culturas, aprendamos a convivir.

En lugar de hacer frente a estos nuevos retos, las políticas desarrolladas en estos últimos años por el Gobierno valenciano del PP han supuesto un deterioro permanente del servicio público de educación. Este permanente deterioro está frustrando las expectativas de futuro de numerosos jóvenes, fundamentalmente de los que finalizan la educación obligatoria sin la cualificación y formación necesaria para su desarrollo personal y profesional. Entre los diferentes indicadores que demuestran esta situación se pueden señalar:

- La falta de oferta pública en los nuevos barrios de las ciudades en expansión, junto con los barracones crónicos que existen en algunas poblaciones.
- La casi nula oferta de educación infantil de 0 a 3 años y las ratios elevadas en esta etapa educativa.
- La falta de apoyo en Primaria para atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado en aspectos básicos como la lectura, la escritura o el cálculo.
- Un apoyo insuficiente a la implantación de los programas de enseñanza en valenciano que garanticen la continuidad del alumnado en las distintas etapas educativas.
- La falta de bibliotecas escolares adecuadas y la escasa introducción de las tecnologías de la información y la comunicación
- La escasa oferta de los servicios educativos que demandan las familias: comedor escolar, horario de apertura de los centros, oferta de actividades complementarias.
- La concentración del alumnado con mayores dificultades de aprendizaje (especialmente el alumnado de origen inmigrante) en los centros públicos, unido a la falta de apoyos específicos para atender a este alumnado.
- La tardanza en cubrir las bajas del profesorado, de los educadores para el alumnado con necesidades educativas especiales y del personal de administración y servicios.
- La imagen, que en ocasiones, contribuyen a magnificar los medios de comunicación, de un incremento de la violencia escolar en los centros educativos, con una Administración que lejos de resolver los problemas pone en marcha el Plan PREVI (prevención de la violencia escolar), que solo ha conseguido incrementar la burocracia en los centros.
- El insuficiente apoyo a los centros ubicados en las zonas rurales.
- La falta de autonomía en los centros y la insuficiencia de recursos económicos y materiales junto con la falta de los medios personales adecuados para desarrollar sus proyectos educativos.
- La inexistencia de una formación permanente del profesorado adaptada a las nuevas necesidades para poder atender a la diversidad del alumnado escolarizado.

- La insuficiencia de programas específicos en la Educación Secundaria para poder atender al alumnado con mayores dificultades, especialmente al alumnado que rechaza su escolarización en los últimos años de la educación obligatoria.
- La escasa oferta de estudios de bachillerato y formación profesional. En la Comunidad Valenciana solo el 59,3% de los alumnos continúan estudios al finalizar la educación obligatoria, 4 puntos por debajo de la media española y a 26 puntos de distancia del objetivo europeo para el 2010, que el 85% de la población tenga estudios de bachillerato o formación profesional.

Este conjunto de factores ha provocado, entre otras cosas, que en los últimos 5 años la Comunidad Valenciana ha liderado el incremento del fracaso escolar en España, ha pasado de un 25.9% a un 34.1%. Hoy, uno de cada 3 jóvenes valencianos acaba la escolaridad obligatoria sin el título de graduado en Educación Secundaria.

Las organizaciones y personas firmantes de este Manifiesto consideramos necesario un cambio en la dirección de la política educativa que garantice, entre otras, las siguientes cuestiones:

- Necesitamos disponer de centros dignos y acabar con los barracones crónicos, lo que requiere un Plan de construcciones escolares con la dotación del suelo público suficiente para adaptar el mapa escolar a las nuevas necesidades de la población.
- Hay que intervenir a tiempo para prevenir el fracaso escolar, incrementando sustancialmente la oferta de plazas públicas en Educación Infantil, desarrollando desde la Educación Primaria actividades específicas de apoyo para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, y garantizando en la Educación Secundaria una oferta educativa diversa para poder atender, desde los primeros cursos, tanto a quienes tienen mayores dificultades como a quienes tienen mayor capacidad y motivación para aprender.
- Todos los centros públicos y concertados deben desarrollar los programas necesarios para que al finalizar la educación obligatoria todo el alumnado pueda expresarse correctamente en valenciano y en castellano.
- Es imprescindible un compromiso decidido con las familias que permita conciliar la vida laboral y personal, que fomente la participación de los padres y madres los centros a la vez que ofrezca servicios de apoyo a las familias.
- Hay que garantizar la escolarización equitativa del alumnado con especiales dificultades entre todos los centros públicos y concertados y dotarlos de la autonomía y los recursos necesarios para asegurar al máximo el éxito de todo el alumnado.
- Hay que apoyar de forma clara al profesorado, mejorar sus retribuciones y favorecer el reconocimiento social de su trabajo.
- Hay que adoptar medidas orientadas a mejorar la convivencia en los centros, potenciando el diálogo de todos los sectores de la comunidad educativa y una mayor colaboración entre las familias y los centros educativos.

Para lograr todos estos objetivos es necesario un mayor compromiso social con la educación, es necesario invertir más y mejor en educación hasta alcanzar, como mínimo, la media de los países de la Unión Europea.

Por todo ello, las organizaciones y las personas firmantes de este Manifiesto exigimos al Gobierno de la Generalitat que deje de gastarse el dinero de todos los valencianos en propaganda engañosa, que deje de ignorar a la comunidad educativa, que deje de fomentar la desigualdad entre los ciudadanos y ciudadanas para escoger el centro que desean. Le exigimos que deje de reunirse con los gobiernos del PP de otras Comunidades Autónomas para decidir lo que hay que hacer en la Comunidad Valenciana y cumpla con su obligación como Gobierno de

